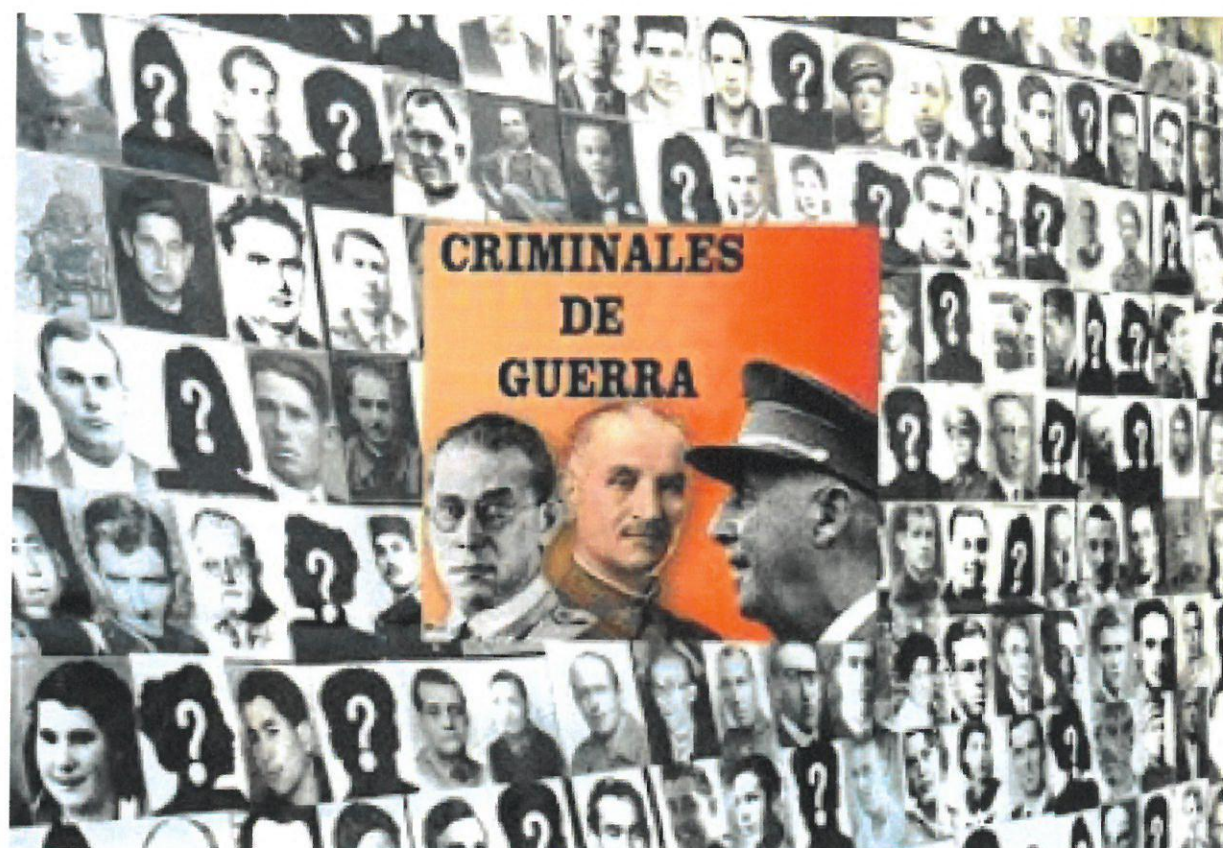


# **LA DEMOCRACIA ESPAÑOLA ANTE EL GENOCIDIO FRANQUISTA**



**Pedro López López**

Nº 333

cuadernos  
*Caum*

**Autor:**

**Pedro López López**

**Profesor de la Universidad Complutense de Madrid**

Edita e imprime: CAUM

Marzo 2018

C/Atocha, 20 - 1º izqda. Madrid 28012

Tfno. 91-3691652 [www.caum.es](http://www.caum.es)

Correo: [caummadrid@gmail.com](mailto:caummadrid@gmail.com)

También en Facebook y Twitter



# **LA DEMOCRACIA ESPAÑOLA**

## **ANTE EL GENOCIDIO FRANQUISTA <sup>(1)</sup>**

### **1. INTRODUCCIÓN**

Ningún gobierno democrático en España ha hecho justicia con las víctimas del franquismo (asesinados, torturados, humillados, violadas, niños robados, presos, trabajadores esclavos, familias expoliadas, torturados, inhabilitados profesionalmente...).



El régimen franquista fue uno de los más crueles del siglo XX, su naturaleza criminal y fascista sigue siendo ocultada por los dirigentes políticos de la derecha española. El silencio institucional ha sido clamoroso; el ninguneo de la Segunda República Española (1931-1936), el vacío en todo lo referente a estos temas, así como hacia el exilio español derivado de la guerra civil y la represión franquista, ha sido indigno de un estado democrático. Como ha sido indigna la colaboración en todo ello de una parte de la sedicente izquierda española, con un Partido Socialista Obrero Español que ha estado en el gobierno 22 años desde la recuperación de la democracia.

Además de la desgana en recuperar la memoria histórica democrática, este partido, que supuestamente ha representado a gran parte de la izquierda durante cuatro décadas, ha colaborado en la destrucción de edificios y lugares que deberían haberse conservado como lugares de memoria (plaza de toros de Badajoz, cárcel de Carabanchel...), contribuyendo así a la desmemoria buscada por la derecha española.

Igualmente, algunos de sus dirigentes han alimentado el discurso de la equidistancia entre *dos bandos*, un discurso que no solo equipara improcedentemente los excesos que pudieron cometer republicanos y fascistas, sino que además pone en pie de igualdad la defensa de un sistema y un gobierno legítimos resultantes de las urnas, con el ataque sobre la base de un exterminio planificado de una banda fascista que obtuvo el apoyo de los dos fascismos existentes en ese momento en Europa, el nazismo y el fascismo italiano. Una muestra de esta actitud equidistante es la declaración que el gobierno del PSOE hizo en julio de 1986 con motivo del 50 aniversario de la guerra civil. En dicha declaración manifiesta el **¡respeto!** *“a quienes desde posiciones distintas a las de la España democrática, lucharon por una sociedad diferente a la que también muchos sacrificaron su propia existencia, o sea, un reconocimiento igual a los que lucharon defendiendo la democracia y a los que lucharon contra ella”*. El historiador Francisco Espinosa (2015, p. 108) señala un dato revelador y sintomático de esta política de olvido practicada incluso por un gobierno supuestamente de izquierdas: entre 1985 y 1995 el número de personas que pensaban que el régimen de Franco *“tuvo sus cosas buenas y sus cosas malas”* pasó de un 46 a un 63%. Nótese que el PSOE gobernó entre 1982 y 1996, con un gobierno presidido por Felipe González, por tanto en materia de memoria histórica democrática su labor fue peor que nula, por lo que cuando el gran partido de la derecha en España, el Partido Popular, llegó al poder en 1996 encontró el terreno abonado para continuar en la misma línea sin coste político alguno, como recuerda Espinosa. En 1999, cuando Pinochet, admirador de Franco, fue detenido en Londres, Felipe González arremetió en un artículo de prensa contra quienes apoyaban la iniciativa de juzgarlo; aunque en 2001 González, en un atisbo de mala conciencia declaró sentirse *“responsable, no culpable, de la ausencia de ese debate [memoria histórica] durante mi mandato”*.

Hay que poner énfasis en esta crítica porque sin la colaboración de esta *llamada izquierda* no habría sido posible la desmemoria alcanzada en España en estos temas. A esto se añade la pervivencia de lo que ha dado en llamarse un franquismo sociológico producto de un tránsito a la democracia que no depuró los cuerpos represivos del franquismo



(jueces, altos mandos militares y policiales, etc.) y que, a través de sus descendientes, muchos de los cuales prácticamente han heredado puestos de poder, siguen falseando la historia del franquismo. A día de hoy, en España es legal y recibe subvenciones del estado la Fundación Francisco Franco, algo inconcebible en una democracia de calidad; igual que es legal *el partido* Falange Española de las JONS, *un partido* que en la guerra y la posguerra funcionó como banda paramilitar perpetradora de un sinnúmero de asesinatos, violaciones y humillaciones diversas a mujeres, palizas y torturas, etc. *Un partido* que a fecha de hoy se atreve a interponer querellas a periodistas, jueces o historiadores por referirse a su historia negra, alegando la defensa de su honor.

En cuanto al Partido Popular, el partido que gobierna España desde 2011 hasta la actualidad, habiendo gobernado también entre 1996 y 2004, todavía no ha sido capaz de condenar claramente la dictadura franquista, habida cuenta de que parte de sus más altos dirigentes son descendientes de autoridades franquistas, jueces, altos mandos militares, etc. Sus dirigentes, tanto los que son descendientes de autoridades franquistas como los que no lo son, se aferran al discurso de la equidistancia (teoría de los dos demonios, ambos bandos perpetraron atrocidades, sin diferencias entre ellos), equiparando un gobierno legítimo salido de las urnas a una democracia que cumplía los estándares en materia de derecho internacional, con una banda fascista que perpetró un golpe de estado cuya ejecución desembocó en una guerra civil y una dictadura de casi cuatro décadas. Por otro lado, estos dirigentes se empeñan en mantener bajo una losa de silencio la memoria histórica democrática; sin embargo, la memoria fascista la conservan con buena salud, recordando continuamente a víctimas de su bando y proponiendo la beatificación y canonización de monjas y sacerdotes que apoyaron el golpe, olvidando interesadamente que también fueron asesinados sacerdotes que defendieron la República. De hecho, una reciente Ley de Víctimas del Terrorismo (2011), promulgada bajo gobierno del PSOE, está pensada para las víctimas del terrorismo de ETA y del terrorismo yihadista, silenciando a los cientos de miles de víctimas del terrorismo de estado practicado durante más de cuarenta años por los aparatos de represión franquistas (se siguió torturando

hasta la Transición). Las tímidas medidas contempladas en la llamada Ley de Memoria Histórica (2007), puesta en marcha por el PSOE, son furibundamente contestadas y boicoteadas por la derecha; el reciente cambio de nombre de calles en Madrid y otras ciudades dedicadas a criminales golpistas como los generales Yagüe, Varela, Dávila, Fanjul, Millán Astray, Saliquet, ha servido para que la extrema derecha interponga recursos y prodigue amenazas.

Si la memoria histórica democrática ha adquirido visibilidad en España y se ha ido abriendo paso en el debate público ha sido, sin duda, gracias a la tenacidad de víctimas, familiares y simpatizantes de estas causas (causa de la reparación de las víctimas del franquismo, de la reivindicación de la República y del exilio). El movimiento memorialista en España ha alcanzado bastante vigor desde la entrada en el siglo XXI, aunque ya en el franquismo se registra un antecedente tan temprano como en 1965, la fundación de la Asociación de Expresos y Represaliados Políticos Antifranquistas, que fue legalizada en 1979, una vez recuperada la democracia. A partir de 1977 (primeras elecciones democráticas) el movimiento por la recuperación de la memoria antifranquista comienza a activarse. En 1977-1978 se registran las primeras exhumaciones (Palencia, Canarias). En 1978 se presenta en Madrid el Tribunal Cívico Internacional contra los Crímenes del Franquismo apoyado por personalidades del mundo de la cultura, pero en la primera reunión son detenidos los promotores y cinco periodistas. Después de las elecciones municipales de 1979 se inicia la búsqueda de cientos de desaparecidos, sin eco en la prensa. En los años ochenta comienzan a surgir asociaciones e iniciativas, pero el movimiento experimenta un parón tras el golpe de estado en febrero de 1981, que hace sentir que las amenazas de la extrema derecha siguen presentes. No se produce un despegue del movimiento hasta el año 2000, cuando tiene lugar la primera exhumación científica con pruebas de ADN; esta exhumación fue impulsada por el periodista Emilio Silva, nieto de un fusilado en Priaranza del Bierzo (provincia de León) y tuvo un fuerte eco mediático; a partir de ella se constituyó la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH). En una línea más política surge en 2004 la Federación Estatal de Foros por la Memoria,

siendo estas dos iniciativas las más señaladas, sin que quepa ignorar otras muchas iniciativas (La Comuna, Archivo Guerra Civil y Exilio -AGE-, Plataforma Contra la Impunidad del Franquismo...) en las que aquí no procede extenderse. En los últimos años han surgido iniciativas que han ayudado a visibilizar el movimiento y a sensibilizar a la población, como la llamada Ronda de la Dignidad, de la Plataforma Contra la Impunidad del Franquismo, que surgió en 2010 con una ronda en la Puerta del Sol de Madrid, emulando la de las Madres de la Plaza de Mayo en Buenos Aires. Igualmente, en 2010 se interpuso una querrela en Buenos Aires por los crímenes del franquismo, querrela a la que se han adherido muchas víctimas y asociaciones. Dada la labor obstruccionista del estado español con la justicia argentina, en el mismo territorio español comenzaron a surgir querrelas de algunos ayuntamientos en los juzgados territoriales que han llevado a la justicia los crímenes cometidos contra sus vecinos.

En España queda bien reflejada la sentencia magistral del poeta argentino Juan Gelman (cit. por Izard, 2015, p. 83): “desaparecen las dictaduras de escena y aparecen inmediatamente los organizadores del olvido”. Miguel Núñez, miembro de la dirección del Partido Socialista Unificado de Cataluña (PSUC) citado en el informe pericial de Babiano, señala la finalidad y la saña del régimen en materia de torturas.

## **2. LA NATURALEZA FASCISTA Y GENOCIDA DEL RÉGIMEN DE FRANCO**

En 1946 Franco pidió el ingreso de España en la Organización de las Naciones Unidas. La ONU respondió negativamente -resolución 32(1) de 1946-, ya que el gobierno español había sido fundado con el apoyo de las potencias del Eje (Alemania, Italia), y que no poseía *“en vista de sus orígenes,*



*su naturaleza su historial e íntima asociación con los Estados agresores, las condiciones que justifiquen su admisión*". En diciembre del mismo año, la resolución 39(1) de Naciones Unidas considera que el gobierno fascista de Franco fue impuesto al pueblo español por la fuerza y, por tanto, no representa al pueblo español. *"En origen, naturaleza, estructura y conducta general, el régimen de Franco es un régimen de carácter fascista, establecido en gran parte gracias a la ayuda recibida de la Alemania nazi de Hitler y de la Italia fascista de Mussolini"*, dice la resolución, recomendando que todos los miembros de las Naciones Unidas retiren a sus embajadores y ministros plenipotenciarios acreditados en Madrid.

Para el historiador Ángel Viñas (cit. por Hernández Sánchez 2016, p. 111), el franquismo ostentó **cinco rasgos fascistas** que se mantuvieron a lo largo de toda la dictadura (1939-1975): 1) La voluntad todopoderosa e ilimitada del dictador; 2) la permanente exaltación del Caudillo providencial; 3) la subordinación absoluta del partido único y de unas Cortes meramente decorativas; 4) el predominio de la violencia estructural; y 5) la negación absoluta de los intereses de clase contrapuestos. Por otro lado, para Viñas (2013) es evidente la connivencia de la Italia fascista con el golpe de estado del 18 de julio y su participación en los preparativos del mismo. Bien es cierto, apunta Hernández Sánchez, que debido a la gran duración de la dictadura, mutaron algunas de sus formas externas. De su plena identificación con el fascismo, pasó a distanciarse aparentemente de éste en la búsqueda de una necesaria respetabilidad internacional durante el período de la guerra fría. En 1942, cuando el fascismo parecía ir perdiendo en la Segunda Guerra Mundial, Franco acuñó a la expresión democracia orgánica, presentada *"como una especificidad española, que difería de los fascismos y de las democracias occidentales y que canalizaba la participación ciudadana a través de las entidades naturales"* [familia, municipio, sindicato] (Babiano y otros, 2017), en definitiva, una especie de variante de la democracia occidental. Pero el modelo corporativo de esta democracia orgánica, dicen Babiano y otros, coincidía esencialmente con el ideario de José Antonio Primo de Rivera, fundador de la Falange Española.



Sobre el carácter genocida del régimen de Franco ha habido mucho debate. El concepto de genocidio implica la intención deliberada de destruir parcial o totalmente un grupo nacional, étnico, racial o religioso. Las razones políticas fueron excluidas de la definición que aparece en la Convención contra el Genocidio de 1948, lo que se mantuvo en el Estatuto de Roma de 1998, que regula la Corte Penal Internacional. No obstante, las razones políticas han sido de alguna manera progresivamente incorporadas al delito de genocidio en la jurisprudencia y en el debate jurídico, considerando una nueva figura denominada autogenocidio. En un artículo de 2009, el abogado Carlos Slepoy, impulsor de la llamada querrela argentina por los crímenes del franquismo, trataba esta cuestión e informaba de que la expresión autogenocidio fue utilizada por primera vez por Benjamín Whitaker en el informe que elaboró como relator especial de las Naciones Unidas para Camboya. Whitaker constató que entre 1975 y 1979 los jemeres rojos camboyanos exterminaron a millones de ciudadanos de su propia nación y utilizó este neologismo, considerando que no había dos grupos humanos diferenciados, sino que las diferencias estaban en el propio seno del grupo nacional. Slepoy consideraba que la misma calificación cabía aplicar para los crímenes de la dictadura argentina y de la dictadura franquista. Lo que los golpistas argentinos, chilenos o españoles pretendieron fue la construcción de una nueva nación en la que debían desaparecer los grupos por ellos señalados (en España, definidos como la Antiespaña, que incluía socialistas, comunistas, anarquistas, homosexuales, ateos, republicanos, liberales... en definitiva cualquiera que no compartiera los valores del nacionalcatolicismo).

El franquismo comienza con un sangriento golpe de estado perpetrado el 18 de julio de 1936 (aunque el 17 de julio ya hubo asesinatos), golpe de estado que no triunfa al encontrarse con una resistencia que los golpistas no calcularon bien, comenzando por la capital, Madrid, que tras la amenaza de caer en unos meses (noviembre de 1936), aguanta hasta 1939. Esta resistencia provoca un enfrentamiento armado de casi tres años, una guerra civil preludio de la Segunda Guerra Mundial, que enfrenta el fascismo a la democracia. Los defensores de la equidistancia sostienen que ambos bandos (terminología tramposa) fueron

responsables de excesos criminales, pero los datos acumulados por cientos de investigadores y miles de publicaciones permiten concluir con toda rotundidad que los que se levantaron en armas siguieron un plan de exterminio concebido con toda frialdad, un auténtico plan genocida durante el que cualquiera que se opusiera al concepto de nación de los golpistas sería asesinado. Nada parecido se constata en el campo republicano, donde es cierto que se producen algunos excesos, pero producto de un clima exaltado donde se producen asesinatos en caliente. Además, sin duda está la diferencia de magnitud en los asesinados en retaguardia. Los datos más acabados concluyen que en el campo de batalla se produjeron unos 300.000 muertos durante la guerra civil. Sin embargo, lejos del frente se produjeron unas 150.000 víctimas por la represión franquista y unas 50.000 por la represión republicana, cifras que aporta Paul Preston en su magna obra *El holocausto español*. Espinosa y Ledesma aportan cifras parecidas en un listado de víctimas por comunidades autónomas: 130.199 víctimas a manos de la represión franquista y 49.272 a manos de los republicanos (Espinosa y Ledesma, 2015).

Aparte de las cifras registradas en la guerra civil, hay multitud de pruebas documentales que revelan el plan de exterminio preparado por Franco y sus compañeros de armas. El historiador Francisco Moreno (2016, p. 219) cita dos declaraciones muy representativas:

*“...Tenemos que matar, matar y matar [...] Nuestro programa consiste en exterminar un tercio de la población masculina en España. Con eso se limpiaría el país y nos desharíamos del proletariado”*. Declaraciones del capitán Gonzalo de Aguilera, uno de los oficiales de prensa de Franco, pronunciadas ante el periodista norteamericano John Whitaker.

*“...Estamos por consiguiente obligados a destruir al menos un tercio de sus habitantes. El único medio consiste en organizar la subnutrición que en este caso es mejor que las ametralladoras”*. Mariscal alemán Von Runstedt, en la Academia de Guerra del Reich, en 1943, referente a los países ocupados.

Como vemos, el esquema mental de los franquistas era muy parecido al de los nazis, incluyendo el concepto de limpieza, presente en otros genocidios. Sobre la subnutrición de la que hablaba el mariscal nazi Von Runstedt, el número de defunciones en prisión en España entre 1939 y 1940, con Franco ya en el poder, se eleva a 150.000, según Gómez y Marco, p. 85.



Sigamos con el plan de exterminio de los golpistas de 1936. Preston afirma que *“Durante la guerra civil, el terror del Ejército africano [se refiere al ejército de los golpistas, cuyos dirigentes habían estado antes en la guerra de Marruecos] se desplegó en la Península como instrumento de un plan fríamente urdido para respaldar un régimen autoritario. La represión orquestada por los militares insurrectos fue una operación minuciosamente planificada”* (Preston, 2011, p. 18). Existen muchas pruebas, tanto escritas (bandos militares y otros documentos) como grabadas (grabaciones de radio) en las que los urdidores del golpe dejan claras sus intenciones de exterminar al adversario y de imponer el terror. He aquí algunas:

General Queipo de Llano (ocupó parte de Andalucía en los primeros días del golpe): *“Yo os autorizo a matar, como a un perro, a cualquiera que se atreva a ejercer coacción ante vosotros. Que si lo hicierais así, quedaréis exentos de toda responsabilidad”* [...] *Nuestros valientes legionarios y regulares han enseñado a los rojos lo que es ser hombre. De paso, también a las mujeres de los rojos [...] Dar patadas y berrear no las salvará”*. Alocución radiada en Sevilla, julio de 1936.

General Queipo de Llano: *“Serán pasados por las armas, sin formación de causa, las directivas de las organizaciones marxistas o comunistas que en el pueblo existan y en el caso de no darse tales directivas, serán ejecutadas un número igual de afiliados arbitrariamente elegidos”*. Bando militar del 24 de julio de 1936.

General Emilio Mola: *“Producido el movimiento (Base 5ª) y declarado el Estado de Guerra [...] se tendrá en cuenta que la acción ha de ser en extremo violenta para reducir lo antes posible al enemigo, que es fuerte y bien organizado. Desde luego, serán encarcelados todos los directivos de los partidos políticos, sociedades o sindicatos no afectos al movimiento aplicándose castigos ejemplares a dichos individuos, para estrangular los movimientos de rebeldía o huelgas”*. Instrucción Reservada nº 1, de abril/mayo de 1936.

General Emilio Mola: [Hay que] *“eliminar sin escrúpulos ni vacilación a todos los que no piensen como nosotros”*. Citado por Paul Preston (2011, p. 18).

La implantación del terror por parte de los rebeldes al estado democrático (y esto solo podía hacerse cometiendo crímenes de guerra) fue una constante; así, el historiador Miguel Izard (2015, p.66) cuenta que en Sevilla el general Queipo de Llano ordenó que las ejecuciones no se hicieran en los cuarteles, sino en las calles de los barrios proletarios, manteniendo los cadáveres entre doce y dieciséis horas a la vista, para infundir terror entre la población. También Izard recoge el dictamen de Francisco Partaloa, fiscal del Tribunal Supremo de Madrid en 1936, que debió salir de la capital y pasó por Sevilla; dicho fiscal declara: *“Tuve la oportunidad de ser testigo de la represión en ambas zonas. En la nacionalista [el bando fascista], era planificada metódica, fría. Como no se fiaban de la gente, las autoridades imponían su voluntad por medio del terror. Para ello, cometieron atrocidades. En esto ambas zonas se parecían, pero la diferencia reside en que en la zona republicana los crímenes los perpetró una gente apasionada, no las autoridades. Estas siempre trataron de impedirlos”*.

Antonio Bahamonde era un alto funcionario católico y de derechas que apoyó el golpe de estado fascista en Sevilla. Durante un año fue delegado de propaganda del gobierno faccioso. Asqueado de tanto asesinato, al cabo de un año huyó a Portugal y más tarde escribió sus memorias, en las que dice: *“No ha sido un desbordamiento de Falange o de militares exaltados lo que ha ocasionado tanto crimen, no; no ha sido eso. Ha sido crimen organizado desde el poder”*. Su testimonio es



valiosísimo por haber presenciado desde dentro el horror fascista; como lo es el que dejó escrito el escritor francés Georges Bernanos, también católico de derechas que estaba pasando las vacaciones en Palma de Mallorca en julio de 1936 y volvió a su país horrorizado de los crímenes de los que tuvo conocimiento en la isla, reflejando posteriormente su decepción en la obra *Les Grands Cimetieres sous la lune (Los grandes cementerios bajo la luna)*. Todos estos testimonios, y otros cientos, documentan un terror planificado contra un grupo muy amplio de la nación española, que puede conceptuarse como un genocidio, o como una práctica social genocida, expresión que prefiere el especialista argentino Daniel Feierstein (2007). Estas prácticas de asesinatos, saqueos, violaciones, humillaciones, palizas, etc. no fueron incontroladas, como pretende alguna propaganda, sino controladas en todo momento por el ejército. Muchos de los que tomaron parte en ellas no pudieron con el cargo de conciencia y terminaron suicidándose, señalan Gómez y Marco.

Moreno (2016, pp. 249-250) destaca la intencionalidad indudable del franquismo en su plan de aniquilamiento del grupo nacional discriminado (media España), refiriéndose a su obsesiva estrategia de perseguir al grupo republicano hasta en el extranjero. Si la violencia de los franquistas hubiera tenido que ver solo con el desarrollo de la guerra, apunta Moreno, una vez terminada la misma habría cesado la persecución, pero Franco siguió persiguiendo republicanos en el extranjero durante años, algunos de los cuales fueron detenidos en Francia y retornados a España para ser fusilados; incluso se llegó a secuestrar a niños exiliados por el Servicio Exterior de Falange, todo lo cual muestra la planificación del exterminio y la saña del régimen.

Durante la guerra civil y la posguerra, los desmanes cometidos, aunque perpetrados bajo control militar en todo momento, no se atuvieron a procedimientos muy pautados, se asesinaba a personas en cunetas, tapias de cementerios y otros lugares sin que en muchísimos casos quedara constancia en los registros administrativos. Sin embargo, el franquismo legisló para dar una apariencia legal al sistema. En 1962, la Comisión Internacional de Juristas publicó en Ginebra un informe bajo

el título *L'Espagne et la Primeauté du Droit*, en el que se analizaban y denunciaban las falacias pseudojurídicas del sistema, dejando en evidencia la farsa de la juridicidad de la dictadura franquista (Aróstegui, 2012, pp. 31-32). La dictadura comenzó matando y terminó matando (los últimos fusilamientos fueron en septiembre de 1975).

### **3. POSIBLES DELITOS INTERNACIONALES COMETIDOS POR EL FRANQUISMO EN LA GUERRA CIVIL Y EN LA DICTADURA** <sup>(2)</sup>

#### **3.1. CRÍMENES CONTRA LA HUMANIDAD**

Aunque estos crímenes recibieron un reconocimiento legal ya en 1868, cuando la Declaración de San Petersburgo prohibió el uso de determinados proyectiles por ser “contrarios a las leyes de la humanidad” (Equipo Nizkor, 2004) <sup>(3)</sup>, la tipificación internacional se asienta con el Estatuto del Tribunal de Núremberg, de 1945. Originalmente se refería al “*asesinato, el exterminio, la esclavización, la deportación y otros actos inhumanos cometidos contra población civil antes de la guerra o durante la misma*”, así como a “*la persecución por motivos políticos, raciales o religiosos*”. Posteriormente, la Asamblea General de Naciones Unidas, en la resolución 95 (11-12-1946) confirma los principios de Derecho Internacional reconocidos por el Tribunal de Núremberg y por la sentencia de ese Tribunal, adquiriendo alcance universal. Hoy se utiliza más la expresión de **crímenes de lesa humanidad**, y están contemplados en el Código Penal español (art. 607 bis) considerando que son crímenes de lesa humanidad la realización de actos graves contra las personas (tortura, asesinato, detención ilegal, deportación, detención ilegal, esclavitud, delitos sexuales) siempre que se cometan “*como parte de un ataque generalizado o sistemático contra la población civil o contra una parte de ella*”.

Dentro de esta categoría genérica de **crímenes de lesa humanidad** cabe señalar los principales delitos señalados en los autos del juez Baltasar Garzón (2008), en el informe de la Unión Progresista de Fiscales (2009), en el informe del Equipo Nizkor (2004) y en el dictamen de la Asociación Española para el Derecho Internacional de los Derechos Humanos (2008).

**Desapariciones forzadas.** O detención ilegal sin dar razón del paradero de la víctima (incluyendo robo de niños). El número total de desapariciones forzadas no es fácil de obtener, pero los cálculos más recientes se aproximan a las 130.000-150.000, distribuidas en 2311 fosas comunes localizadas (podría haber otras sin localizar). La mayor fosa común es la de San Rafael (Málaga), con 4571 cadáveres. A estas desapariciones se suma el robo de bebés a las presas republicanas, que en las últimas décadas del franquismo y ya en democracia se había convertido en un negocio lucrativo del que hay noticias hasta mediados de los años noventa del pasado siglo. El juez Garzón recoge en sus autos de 2008 unos 30.000 casos, pero estos autos abarcan solo hasta 1952, la trama puesta en marcha en los primeros años de la posguerra se extiende casi cuatro décadas más y con seguridad sobrepasa los 100.000 casos. El delito de robo de niños es un delito continuado hasta que no se aclare la identidad robada de esos niños.

**Torturas y tratos crueles y degradantes.** La tortura durante el franquismo era sistemática. La jueza Servini de Cubría (ver Anexo), que instruye la llamada querrela argentina, ha pedido la extradición de varios torturadores que infligieron torturas y malos tratos a detenidos hasta entrada la democracia. El caso más conocido es el torturador Antonio González Pacheco, apodado *Billy el Niño*, que tiene decenas de denuncias de detenidos políticos que pasaron por sus manos. González Pacheco tiene en la actualidad 71 años, sus torturas y palizas fueron perpetradas en los últimos años del franquismo y en la transición. Un testimonio de Miguel Núñez, miembro de la dirección del Partido Socialista Unificado de Cataluña (PSUC) citado en el informe pericial de Babiano, señala la finalidad y la saña del régimen en materia de torturas:

*“Con la violencia, la tortura y el terror ejercido contra ellas y, a veces, incluso contra sus seres más queridos, buscaban hacer del valiente, en el sentido más humano, un cobarde aterrorizado; en hacer del más generoso, un egoísta que sólo pensase en librarse de su tragedia personal; en hacer del fraternal y solidario con sus compañeros de lucha, un traidor que les denunciase, que les vendiese; en suma, lograr que la persona digna y ejemplar se convirtiese en un ser indigno y humillado”.*

Otro caso especialmente doloroso, citado también en el mismo informe pericial de Babiano, fue el de la joven de 23 años Elia Martínez, del que se hizo eco la prensa internacional, y que estando embarazada fue obligada a bailar bajo los golpes de la policía mientras su novio, también detenido, era obligado a presenciar el espectáculo hasta que delatase a los compañeros. Cuando Elia dio a luz, la criatura murió y su compañero, José Duplá, se suicidó más tarde.

Por supuesto, los médicos forenses que debían levantar acta del estado de los detenidos no cumplían con su obligación. El mismo informe pericial relata el caso de José Antonio Vidal, detenido en mayo de 1976 (ya había muerto el dictador). Después de ocho días de torturas, con unas esposas que le hacían sangrar, Vidal cuenta que estuvo cuatro días sin poder hacer de vientre ni orinar prácticamente; cuando consiguió hacerlo orinaba sangre. Los golpes que recibió fueron innumerables, los policías apagaban cigarrillos en su pecho y brazos, le aplicaron corrientes eléctricas, le hicieron la tortura conocida como la bañera (sumergir la cabeza en agua hasta provocar una sensación insoportable de asfixia). Cuando el médico le preguntó si había sufrido torturas, se subió la camisa y mostró el pecho y la espalda cubiertos de moratones y desgarramientos de la piel. El médico anotó que no se observaba ninguna señal de tortura.

**Delitos sexuales.** Las violaciones y embarazos forzados, vejaciones y humillaciones a las presas republicanas, así como a las mujeres o madres de fusilados republicanos, por el simple hecho de





serlos, fueron continuas, especialmente durante la posguerra. Sufrieron paseos por los pueblos siendo rapadas y humilladas con la administración de aceite de ricino, un potente laxante que provoca la descomposición y consiguiente deposición, todo ello acompañado de la exposición pública en esas terribles y humillantes condiciones. Por añadidura, a las mujeres, madres o hermanas de asesinados por el franquismo (con frecuencia se encargaban de esas tareas bandas de falangistas) se les prohibía de manera terminante llevar luto. Existen cientos de testimonios de memoria oral y abundantes libros y artículos dando cuenta de estas prácticas.

**Ejecuciones tras juicios sin garantías.** Tanto en la guerra como en la inmediata posguerra, las ejecuciones extrajudiciales fueron masivas, aunque en una segunda fase se procuró dar apariencia de legalidad con procesos sin ninguna garantía para el condenado.

**Encarcelamientos arbitrarios.** Entre abril de 1939 (la victoria fascista fue el 1 de abril de ese año) y enero de 1940 se registraron un millón de presos (en cárceles, campos de concentración y batallones disciplinarios). Es el mayor número de presos en Europa después de la Alemania nazi (Gómez y Marco, 2011). Piénsese que, en tiempos normales, antes de la guerra, el número de presos estaba en torno a los 12.000 (cifras oficiales). Según datos de las propias autoridades franquistas, en las cárceles murieron entre 1939 y 1944 192.684 personas, la mayoría fusiladas. Por otro lado, el número de campos de concentración censados asciende a 188, distribuidos por todo el país.

**Trabajos forzados.** Los presos de batallones disciplinarios estaban obligados, a cambio de reducción de pena o de un miserable jornal, a trabajar en obras públicas (tendido de vías ferroviarias, pantanos, puentes, etc.) y, lo más terrible, la construcción de uno de los monumentos más grandes dedicados a un dictador, la llamada Cruz de los Caídos, donde está enterrado el dictador junto a unas 34.000 víctimas (en el monumento trabajaron unos 20.000 presos). Además de estos abusos, 10.500 obreros fueron trasladados a batallones de trabajo de la Alemania nazi.

**Persecución política, religiosa, racial, etc.** Se perseguía a cualquiera que no encajara en el concepto de *persona de orden*, un orden en el que no cabía ningún partido político (solo se autorizó uno), ningún sindicato (solo había un sindicato oficial), ninguna tendencia religiosa fuera del catolicismo, ninguna desviación sexual, incluso hostigando a minorías étnicas como los gitanos. El país fue una inmensa cárcel incluso para los que estaban fuera de las cárceles. Esta persecución provocó el exilio de cientos de miles de personas, la mayoría al pasar la frontera hacia Francia cuando cayó la República, donde fueron internados en campos de concentración; varios miles fueron entregados por las autoridades francesas a la Alemania nazi, muriendo más de 5.000 en el campo de concentración de Mauthausen. Por otro lado, la represión por el ejercicio de libertades civiles y políticas normales en democracia era brutal.

Durante el franquismo hubo más de 100.000 consejos de guerra por estos delitos. Otro dato que da idea del nivel represor del régimen es que el régimen contaba con un fichero de antecedentes político-sociales que en fecha tan temprana como 1944 ya superaba los tres millones de fichas personales de opositores (Babiano y otros, 2017). Asimismo, fueron destituidos unos 200.000 empleados públicos (Vega, 2012), destitución amparada en el Decreto 108 de 13-9-1936 y en el Decreto Ley de 5-12-1936; normativa complementadas con la Ley de 10-2-1939, que fijaba normas para la depuración de funcionarios públicos obligándoles a acreditar que habían prestado adhesión al Movimiento Nacional. Por último, la Ley de 25-8-1939 se ocupaba de la “*provisión de plazas de la Administración del Estado con mutilados, excombatientes y ex cautivos*”. El aparato represivo funcionaba con toda eficacia. Entre 1959 y 1976 fueron detenidos 74.733 civiles por motivos políticos y comunes de los que fueron procesados 68.400 (Ballbé, 1983, cit. por Babiano et al.).

**Violación de domicilios, saqueos y confiscación de bienes, propiedades y otros efectos.** Los presos y asesinados republicanos, además de este drama, sufrieron normalmente la confiscación posterior de sus bienes, dejando a las familias en la miseria más absoluta. Los saqueos, por otro

lado, fueron frecuentes. Hasta septiembre de 1941, los llamados Tribunales Regionales de Responsabilidades Políticas, creados por la Ley de Responsabilidades Políticas de 1939, habían tramitado más de 125.000 expedientes cuya finalidad principal era el expolio de los bienes de los acusados (dato del informe pericial de Babiano y otros, citado a lo largo de este trabajo).

### 3.2. CRÍMENES DE GUERRA

El derecho internacional humanitario regula los conflictos bélicos. La referencia son los Convenios de La Haya (1899, 1907) y de Ginebra (1949), obligando a un trato humanitario a las víctimas combatientes de la guerra terrestre o marítima, a los prisioneros y a la población civil. La base de los



Convenios de Ginebra son el respeto y la dignidad del ser humano imponiendo la salvaguarda de los principios de humanidad. Se prohíben, en cualquier circunstancia, el homicidio, la tortura, los castigos corporales, las mutilaciones, los atentados contra la dignidad personal, la toma de rehenes, los castigos colectivos y las ejecuciones sin juicio previo. Aparte de estos, los crímenes de guerra se rigen por el Derecho Internacional Consuetudinario (las costumbres de cualquier nación civilizada). Por otro lado, una referencia ineludible que cubre cualquier hueco que pueda haber es la llamada **Cláusula Martens**, incorporada en el preámbulo del Convenio de La Haya de 1899, que declara que *“ningún crimen contra la humanidad podrá quedar impune por no estar previsto en la legislación”*. Esta cláusula nunca ha dejado de estar vigente. Fue ratificada por España apareciendo en la Gaceta Oficial del Estado de 22 de noviembre de 1900, mucho antes de la proclamación de la Segunda República (1931-1936). Por tanto, la cláusula estaba vigente en 1936, según la Constitución Española de 1931 (arts. 7 y 65). A los crímenes cometidos en un contexto de guerra (asesinatos extrajudiciales, torturas, violaciones, vejaciones y malos

tratos, etc.) se añaden decenas de bombardeos sobre ciudades, por tanto sobre población civil; algunas de esas ciudades fueron Guernica (que tuvo proyección internacional tras el famoso cuadro de Picasso), Durango, Figueras, Madrid, Barcelona, Málaga, Majadahonda, Granollers y un largo etcétera, provocando varios miles de víctimas.

### **3.3. GENOCIDIO**

Aunque el delito de genocidio es controvertido para los juristas, este delito ya ha tenido aplicación en varios casos en la justicia española, al menos para la aceptación de querellas por parte de la Audiencia Nacional española (p. ej., caso del militar argentino Scilingo, caso Guatemala, caso Pinochet). La controversia viene, como se ha dicho más arriba, por la no inclusión de la motivación política en la Convención para la Prevención y Sanción del Delito de Genocidio (1948); tampoco el Código Penal español (art. 607) lo hace. Ya se ha explicado por qué es pertinente la calificación de genocidio (vía autogenocidio para referirse al exterminio de un grupo muy amplio que no comparte el proyecto nacional de los golpistas). En el caso Scilingo la causa fue tramitada inicialmente por delito de genocidio, aunque la sentencia no utilizó esta calificación. En el inicio de la causa la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional se refirió al delito de genocidio considerando que es irrelevante que el código penal o la Convención contra el Genocidio no considere un grupo político como posible víctima. Decía la Sala que hoy día el delito de genocidio requiere que la expresión grupo nacional no signifique exclusivamente *“grupo formado por personas que pertenecen a una misma nación”*, sino simplemente *“grupo humano nacional, grupo humano diferenciado, caracterizado por algo”*, de manera que no cabe excluir del concepto el grupo político.

También la querella interpuesta en Argentina el 14 de abril de 2010 por el abogado Carlos Slepoy <sup>(4)</sup> considera el delito de genocidio. La querella razona que es vaga, es indeterminada, por lo que cabe invocar los artículos 31 y 32 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados (1969), que se refiere a la interpretación de los mismos y a los medios de interpretación cuando alguna expresión sea ambigua u



oscura en el sentido, o *“conduzca a un resultado manifiestamente absurdo e irrazonable”*, así como la evolución del derecho internacional, para llegar a la conclusión de que no solo se permite, sino que es obligado *“considerar como objeto de protección a todos los grupos humanos que, como tales, se pretende destruir a través del genocidio”*. Sería absurdo e irrazonable (art. 32) dejar sin protección a los grupos políticos, no estando de acuerdo con la regla general de interpretación (art. 31): *“Un tratado deberá interpretarse de buena fe conforme al sentido corriente que haya de atribuirse a los términos del tratado en el contexto de estos y teniendo en cuenta su objeto y fin”*. Slepoy, redactor de esta querella, dice en una entrevista <sup>(4)</sup>:

*“En España hubo una planificación estudiada y meditada para erradicar a determinados grupos y colectivos con el objetivo de dar origen a otra nación diferente, algo que se logró en gran medida. Eso es un genocidio. Al igual que el nazismo o que la dictadura argentina, los participantes del golpe de estado y la dictadura española buscaban eliminar elementos de una sociedad para crear una sociedad diferente”*.

### **3.4. OTROS DELITOS**

Solo una referencia al marco nacional para decir que algunas fuentes, como el informe de la Unión Progresista de Fiscales, consideran que también cabe aplicar la calificación de terrorismo a los hechos que estamos viendo.

Es una calificación que se ha utilizado en los procesos contra las dictaduras de Chile y Argentina: realización de actos graves contra la vida, integridad o libertad personal, dentro o en relación con una banda o grupo armado y organizado que opera con cierta permanencia, siendo tales actos de carácter ilegal (no permitidos por el ordenamiento interno, y todo ello con la intención de alterar el orden político o de perturbar gravemente la paz social). Cuando una organización o institución oficial se aparta de sus funciones institucionales, para las que está legalmente constituida, y se dedica a perpetrar actos delictivos, pierde la consideración de organización institucional y se convierte en

una banda ilegal armada. Por otro lado, poner fin al funcionamiento del Parlamento y el Gobierno legítimos y eliminar las garantías individuales implica una finalidad de alteración del orden político democrático. Estos razonamientos fueron empleados por sendos autos de la Audiencia Nacional española en los casos de Chile y Argentina, como decíamos más arriba.

Por último, una última calificación que figura en los autos del juez Garzón, es la de Delitos contra Altos Organismos de la Nación y la Forma de Gobierno, de acuerdo con la legislación vigente el 18 de julio de 1936.

Los tres primeros tipos de delito (crímenes contra la humanidad, crímenes de guerra y genocidio) son crímenes internacionales y como tales son imprescriptibles, inamnistiabiles e inindultables, además de estar sujetos al principio de jurisdicción universal, por el cual se pueden perseguir desde cualquier juzgado del planeta.

#### **4. LEGISLACIÓN INTERNACIONAL APLICABLE A LOS CRÍMENES DEL FRANQUISMO**

Si pensamos en los momentos del llamado por el bando rebelde Alzamiento Nacional, la normativa aplicable es la Constitución Española de 1931 y el Código Penal de 1932. Si hubiera que juzgar de acuerdo a la legislación actual, tendríamos que acudir a la Constitución y al Código Penal



actuales. Ambas constituciones acatan en su articulado la normativa internacional (cosa distinta es el cumplimiento). No obstante, vamos a fijar nuestra atención en la legislación internacional, que España, como cualquier otro estado civilizado, está obligada a cumplir. A continuación se señala la legislación internacional más relevante en el tema que nos

ocupa, ordenada cronológicamente y señalando los artículos pertinentes.

**Cláusula Martens (1899).** Se ha mencionado más arriba. Se incorporó en el preámbulo del Convenio de La Haya de 1899 y fue ratificada por España en noviembre de 1900. A pesar de su antigüedad, se sigue invocando en conflictos actuales.

**Derecho Internacional Humanitario: Convenios de La Haya (1899, 1907) y de Ginebra (1949).** Rigen para el trato que deben tener heridos y prisioneros de guerra, por un lado, y la protección que debe recibir la población civil. Los principios de humanidad que intenta aplicar el derecho internacional humanitario establecen que los beligerantes no tienen *“un derecho ilimitado en cuanto a la elección de los medios para dañar al enemigo”* (IV Convenio de La Haya). No se puede atacar o bombardear ciudades, pueblos, casas, etc. En caso de ocupación de territorios, el ocupante tomará las medidas necesarias para restablecer cuanto antes el orden y la vida públicos, respetando las leyes vigentes en el país, y respetando también *“el honor y los derechos de la familia, la vida de los individuos y la propiedad privada”* (IV Convenio de La Haya). Claramente, la propiedad privada no puede ser confiscada, como lo fue a multitud de familias republicanas. En junio de 1977 se aprobaron dos protocolos adicionales a los Convenios de Ginebra que en gran medida unen los dos convenios.

**Estatuto de Londres, por el que se crea el Tribunal de Nüremberg (1945).** Define por primera vez los Crímenes contra la Humanidad como *“el asesinato, el exterminio, la reducción a la esclavitud, la deportación, y cualquier acto inhumano cometido contra la población civil, antes o durante la guerra, o bien la persecución por motivos políticos, raciales o religiosos”*. Los crímenes cometidos por las fuerzas franquistas entran en esta categoría. El estatuto data de 1945, pero se aplicó a los crímenes del nazismo (desde 1933), es decir, retroactivamente, y ello porque los delitos cometidos ya lo eran desde el derecho internacional consuetudinario.

**Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio (1948).** Art. II. En la presente Convención, se entiende por genocidio cualquiera de los actos mencionados a continuación, perpetrados con la intención de destruir, total o parcialmente, a un grupo nacional, étnico, racial o religioso, como tal: a) Matanza de miembros del grupo; b) Lesión grave a la integridad física o mental de los miembros del grupo; c) Sometimiento intencional del grupo a condiciones de existencia que hayan de acarrear su destrucción física, total o parcial; d) Medidas destinadas a impedir los nacimientos en el seno del grupo; e) Traslado por fuerza de niños del grupo a otro grupo.

**Artículo VII.** A los efectos de extradición, el genocidio y los otros actos enumerados en el artículo III no serán considerados como delitos políticos.

Cabe considerar también el delito de genocidio para el caso del robo masivo de niños, perpetrado anterior y posteriormente a 1948, como está ya ampliamente documentado. Podría considerarse este caso contemplado en el apartado e): traslado de niños del grupo a otro grupo.

**Principios de Núremberg (1950).** Se refieren a delitos de derecho internacional (contra la paz, delitos de guerra y delitos contra la humanidad). Principio II: El hecho de que el derecho interno no imponga pena alguna por un acto que constituya delito de derecho internacional no exime de responsabilidad en derecho internacional. Principio III: No será eximente ser Jefe de Estado u otra autoridad. Principio IV: No se admite la obediencia debida.

**Convenio Europeo de Derechos Humanos (1950).** Artículo 2. Derecho a la vida. 1. El derecho de toda persona a la vida está protegido por la Ley. Nadie podrá ser privado de su vida intencionadamente, salvo en ejecución de una condena que imponga pena capital dictada por el tribunal al reo de un delito para el que la Ley establece esa pena. Artículo 3. Prohibición de la tortura. Nadie podrá ser sometido a tortura ni a penas o tratos inhumanos o degradantes.



Con respecto a los arts. 2 y 3, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) tiene la doctrina de que la vulneración de estos artículos reclama una investigación eficaz por parte del Estado, como explica el juez Garzón en sus autos. Además, el TEDH considera víctima de tortura también a los familiares de un desaparecido, en virtud de la situación de angustia y sufrimiento.

**Artículo 7.** No hay pena sin ley. 1. Nadie podrá ser condenado por una acción y/o una omisión que, en el momento en que haya sido cometida, no constituya una infracción según el Derecho nacional o internacional. Igualmente no podrá ser impuesta una pena más grave que la aplicable en el momento en que la infracción haya sido cometida. 2. El presente artículo no impedirá el juicio y el castigo de una persona culpable de una acción o de una omisión que, en el momento de su comisión, constituía delito según los principios generales del derecho reconocido por las naciones civilizadas.

**Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (1966).** Art 6.1. El derecho a la vida es inherente a la persona humana. Este derecho estará protegido por la ley. Nadie podrá ser privado de la vida arbitrariamente.

**Art. 6.3.** Cuando la privación de la vida constituya delito de genocidio se tendrá entendido que nada de lo dispuesto en este artículo excusará en modo alguno a los *Estados Partes* del cumplimiento de ninguna de las obligaciones asumidas en virtud de las disposiciones de la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio. Art. 7. Nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. En particular, nadie será sometido sin su libre consentimiento a experimentos médicos o científicos.

En relación con los arts. 6 y 7, el Comité de Derechos Humanos de la ONU señala que los estados deben investigar en los casos de desapariciones que puedan implicar una violación del derecho a la vida, y que las quejas de torturas deben ser investigadas rápida e imparcialmente. El artículo 15, en sus puntos 1 y 2 establece lo mismo

que el Convenio Europeo de Derechos Humanos en su artículo 7, puntos 1 y 2.

**Convención sobre la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y de Lesa Humanidad (1968).** España la ratificó en 2009 y entró en vigor en diciembre de 2010. Su contenido refleja el Derecho Internacional Consuetudinario. El Comité de Derechos Humanos, en su quinto informe periódico sobre España (2008), ya instó a España a reconocer la imprescriptibilidad de los crímenes de lesa humanidad y proceder a la exhumación e identificación de los desaparecidos del franquismo.

**Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados (1969).**  
**SECCION PRIMERA.** Observancia de los tratados: Art. 26. *"Pacta sunt servanda" (Lo pactado obliga).* Todo tratado en vigor obliga a las partes y debe ser cumplido por ellas de buena fe. Art. 27. *"El derecho interno y la observancia de los tratados. Una parte no podrá invocar las disposiciones de su derecho interno como justificación del incumplimiento de un tratado".*

No puede pertenecerse a la comunidad internacional y firmar tratados sin la intención de cumplirlos, o bien alegar alguna disposición de derecho interno (Ley de Amnistía o Ley de Memoria Histórica, en el caso español).

**Principios de Cooperación Internacional en la identificación, detención, extradición y castigo de los culpables de crímenes de guerra o crímenes de lesa humanidad (1973).** Art.1. Los crímenes de guerra y los crímenes de lesa humanidad, dondequiera y cualquiera que sea la fecha en que se hayan cometido, serán objeto de una investigación, y las personas contra las que existen pruebas de culpabilidad en la comisión de tales crímenes serán buscadas, detenidas, enjuiciadas y, en caso de ser declaradas culpables, castigadas. Art. 8. Los Estados no adoptarán disposiciones legislativas ni tomarán medidas de otra índole que puedan menoscabar las obligaciones internacionales que hayan contraído con respecto a la identificación, la detención, la extradición y el castigo de los culpables de crímenes de guerra o de crímenes de lesa humanidad.

**Convención contra la Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes (1984).** Durante la dictadura franquista, y hasta 1977, muchos ciudadanos sufrieron torturas por pertenecer a organizaciones que luchaban por la recuperación de la democracia. Por otro lado, lo relevante en el caso de los desaparecidos es que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) considera víctima de tortura a los familiares desaparecidos.

**Resolución 828 de 26-9-1984 del Consejo de Europa.** Citada por el juez Garzón. Establece que la desaparición forzada es un crimen contra la humanidad y no podrá ser considerado como delito político. Además, está sujeto a las normas de extradición y no es objeto de limitación ni puede estar cubierto por leyes de amnistía.

**Principios relativos a una eficaz prevención e investigación de las ejecuciones extralegales, arbitrarias o sumarias (1989). Art. 9.** Se procederá a una investigación exhaustiva, inmediata e imparcial de todos los casos en que haya sospecha de ejecuciones extralegales, arbitrarias o sumarias, incluidos aquéllos en los que las quejas de parientes u otros informes fiables hagan pensar que se produjo una muerte no debida a causas naturales.

**Informe Joinet sobre la impunidad de los autores de violaciones de los derechos humanos (1997, actualizado en 2005 con el informe Orentlicher).** Establece los siguientes derechos de las víctimas:

- **A saber.** Es un derecho individual y colectivo, e impone al Estado el deber de memoria a fin de prevenir contra las deformaciones de la historia que tienen por nombre el revisionismo y el negacionismo. El Estado debe crear comisiones de investigación no judiciales (*comisiones de la verdad*) y preservar los archivos que tengan relación con las violaciones de derechos humanos.
- **A la justicia.** Derecho a un recurso justo y eficaz que permita a la víctima valer sus derechos. Este derecho confiere al estado las obligaciones de investigar las violaciones, perseguir a los autores y

asegurar, en su caso, las sanciones pertinentes. Por otro lado, *“la prescripción no puede ser opuesta a los crímenes graves que según el derecho internacional sean considerados crímenes contra la humanidad”*. Igualmente, no se permite la amnistía a los autores de violaciones *“en tanto las víctimas no hayan obtenido justicia por la vía de un recurso eficaz”*. No puede alegarse obediencia debida para exonerar a los ejecutores de su responsabilidad penal, como mucho puede ser atenuante. Por otro lado, la comisión de violaciones de derechos humanos por parte de un inferior compromete a sus superiores si ellos no han hecho uso de sus poderes para impedir o hacer finalizar la violación. Los arrepentidos pueden tener derecho a una disminución de pena, pero no a la exoneración.

- **A la reparación.** La víctima individual tiene derecho a medidas de restitución (recuperar la situación anterior a la violación), de indemnización y de readaptación (atención médica). En el plano colectivo, las medidas van dirigidas a asumir por parte del estado el deber de la memoria, a través de ceremonias conmemorativas, restablecimiento de la dignidad de las víctimas, declaraciones oficiales de reconocimiento por parte del Estado, etc.

- **A las garantías de no repetición de las violaciones.** Esto incluye la disolución de grupos armados paramilitares, la derogación de leyes y jurisdicciones de excepción y la destitución de altos funcionarios implicados en violaciones graves. Por otro lado (art. 22), *“Los Estados*



*incorporarán garantías contra las desviaciones a que pueda dar lugar el uso de la prescripción, la amnistía, el derecho de asilo, la denegación de la extradición, non bis in ídem (no dos veces por lo mismo), la obediencia debida, las inmunidades oficiales, las leyes sobre arrepentidos, la competencia de los tribunales militares, así como el principio de la inamovilidad de los jueces que promueve la impunidad o contribuye a ella”*.



**Estatuto de Roma (Corte Penal Internacional, 1998).** Se ocupa de a) crimen de genocidio, b) crímenes de lesa humanidad, c) crímenes de guerra y d) crimen de agresión. Define detalladamente las acciones que comportan cada uno de los crímenes. Es un tribunal complementario (primero deben actuar los tribunales nacionales). Se ocupa de crímenes cometidos después de la entrada en vigor del Estatuto (2002), pero tanto la desaparición forzada como el robo de niños son continuados mientras no aparezca el cadáver o se aclaren las circunstancias, en el primer caso, y mientras no se aclare la identidad de la persona y las circunstancias, en el segundo caso.

**Resolución de la Comisión de Derechos Humanos 1999/34 sobre impunidad.** [La Comisión] *“Reconoce que para las víctimas de violaciones de los derechos humanos el conocimiento público de su sufrimiento y de la verdad acerca de los autores de esas violaciones es esencial para la rehabilitación y la reconciliación, e insta a los Estados a que redoblen los esfuerzos para ofrecer a las víctimas de violaciones de los derechos humanos un proceso justo y equitativo mediante el cual puedan investigarse y hacerse públicas esas violaciones, y a que alienten a las víctimas a participar en dicho proceso”.*

**Resolución 1463 de la Asamblea Parlamentarios del Consejo de Europa (3-10-2005).** Resolución citada por Garzón en sus autos que establece *“el reconocimiento de la desaparición forzada como un crimen permanente mientras los autores continúen ocultando el paradero de la persona desaparecida y los hechos permanezcan sin aclarar; y, consecuentemente, la no aplicación de la prescripción a las desapariciones de personas”.* El punto 10.3.5 determina la *“exclusión de los autores de desapariciones forzadas de medidas de amnistía o similares y de cualquier privilegio, inmunidades o exenciones de procesamientos”.*

**Principios y directrices básicos sobre el derecho de las víctimas de violaciones de las normas internacionales de Derechos Humanos y del Derecho Internacional Humanitario a interponer recursos y obtener reparaciones (2005).** Esta norma señala inequívocamente en el artículo 1 la *“obligación de respetar, asegurar que se respeten y aplicar las*

*normas internacionales de derechos humanos y el derecho internacional humanitario”, comprendiendo los tratados de los que forma parte el estado y el derecho internacional consuetudinario. En el artículo 8 señala que el concepto de víctima se extiende a familiares, personas a cargo de la víctima directa y personas que hayan sufrido daños al intervenir para prestar asistencia a víctimas en peligro o para impedir la victimización.*

El apartado VIII se refiere al derecho de las víctimas al acceso a la justicia con un recurso judicial efectivo. El apartado IX se extiende en la reparación debida de los daños sufridos por las víctimas, señalando la obligación de los estados de establecer programas nacionales de reparación y otra asistencia a las víctimas, proporcionar una reparación plena y efectiva y una indemnización apropiada a la gravedad de la violación y circunstancias de cada caso, una rehabilitación que incluya asistencia médica, psicológica, jurídica y social. Además, la satisfacción ha de incluir medidas eficaces para la cesación de la violación (las desapariciones forzadas y los robos de niños son delitos que no han cesado, al no aparecer la persona o su cadáver y al no proporcionar la identidad verdadera a los niños), verificación de los hechos y revelación pública y completa de la verdad, búsqueda (por parte del Estado, no de los familiares de las víctimas, ellos mismos víctimas, como hemos visto), disculpa pública que incluya el reconocimiento de los hechos y la aceptación de responsabilidades, aplicación de sanciones a los responsables e inclusión de una exposición precisa de las violaciones ocurridas en la enseñanza de las normas internacionales de derechos humanos y de derecho internacional humanitario, así como en el material didáctico a todos los niveles.

Ninguna de estas obligaciones ha sido atendida por el Estado español como tal, aunque algunas Comunidades Autónomas han promovido algunas iniciativas.

**Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas** (2006 Artículo 12.1. *“Cada Estado Parte velará por que toda persona que alegue que alguien ha sido*

*sometido a desaparición forzada tenga derecho a denunciar los hechos ante las autoridades competentes, quienes examinarán rápida e imparcialmente la denuncia y, en su caso, procederán sin demora a realizar una investigación exhaustiva e imparcial”.* Entró en vigor para España en diciembre de 2010.

## **5 JUSTICIA TRANSICIONAL EN ESPAÑA**

*“No hay páginas limpias en el libro de la historia y ninguna limpieza puede alcanzarse al precio del olvido” (Agnes Heller)*

Los principales y falaces argumentos utilizados por el Estado español para evitar responder ante la legislación internacional se resumen en:

- La aplicación de la Ley de Amnistía de 1977, una ley que vulnera el derecho internacional al utilizarse para dejar impunes crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad, y, además, objeto de una utilización espuria al equiparar a víctimas y a verdugos.
- La llamada Ley de Memoria Histórica de 2007, que no satisface mínimamente las obligaciones que el Estado tiene para con la legislación internacional, y que, además, no es incompatible, según su propio articulado, con la investigación penal, por lo que no cabe utilizarla como escudo contra esta. En todo caso, las leyes internas no pueden ser invocadas como justificación para el incumplimiento de tratados internacionales (Tratado del Derecho de los Tratados, art. 27). Sin embargo, esta ley y la anterior les están sirviendo como escudo para brindar la impunidad de los crímenes del franquismo.
- La presunta prescriptibilidad de los hechos. Los crímenes de lesa humanidad y los crímenes de guerra no prescriben. No cabe tratar los crímenes del franquismo como delitos comunes para esgrimir que están prescritos.
- Irretroactividad. Tanto la cláusula Martens como el Convenio Europeo de Derechos Humanos (art. 7.2) y el Pacto Internacional de Derechos

Civiles y Políticos (art. 15.2) determinan que no puede impedirse el juicio y la condena de una persona por actos u omisiones que en el momento de cometerse constituyeran delitos según los principios generales del derecho reconocidos por la comunidad internacional (naciones civilizadas), aunque no constituyeran delitos bajo el derecho interno.

Como se ha comentado en la introducción, la política de estado en España respecto a la guerra civil y a la dictadura ha estado enfocada al olvido, con una incomodidad palpable en los gobiernos de turno. En 2007 el gobierno de Rodríguez Zapatero (PSOE) promulgó la llamada Ley de Memoria Histórica (Ley 52/2007), una ley que está muy lejos de cumplir los estándares del derecho internacional y satisfacer los derechos de las víctimas de delitos tan graves, por lo que cambió muy poco las cosas. A finales de 2011 llegó al gobierno el Partido Popular y las tímidas medidas y presupuesto que tenían la Ley de Memoria Histórica fueron barridas, incumpliendo en adelante la norma y vaciando el presupuesto. La voluntad de colaboración en materia de políticas de memoria del Partido Popular, actualmente (2018) es nula, en línea con la postura mantenida desde su misma fundación, en 1989, aunque el partido es heredero de Alianza Popular, fundada en 1976 como federación de siete asociaciones políticas, de las cuales seis estaban encabezadas por ex ministros de Franco. Dadas estas raíces, es explicable, no justificable, su posición ante estos temas.

En 2013 y 2014 se produjeron dos visitas de órganos de Naciones Unidas a España relacionadas con los crímenes del franquismo: la del Relator para la Verdad, la Justicia la Reparación y las Garantías de no Repetición, Pablo de Greiff, y la del Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas, presidido por Ariel Dulitzky. Dentro de la cortesía y la diplomacia que caracterizan los informes que emiten este tipo de órganos, las críticas a las políticas de memoria del Estado español fueron numerosas y contundentes y pusieron en evidencia lo poco que ha hecho el Estado español en favor de los miles de víctimas de crímenes horrendos, así como una patente falta de voluntad para



llevar a cabo políticas de memoria. Los informes señalan medidas de justicia transicional que España no ha cumplido:

1. Retirada de símbolos franquistas. Miles de calles, edificios y placas conmemorativas siguen exaltando a altos cargos del franquismo y a militares cuya participación en el genocidio franquista es conocida.

2. Cruz/Valle de los Caídos. Es un monumento megalómano que ensalza al franquismo y que contiene los restos del dictador y del fundador de la Falange, además de los cuerpos de casi 34.000 personas. El lugar debería ser resignificado, explicando que fue construido con el trabajo forzoso de miles de presos. Además, los cuerpos de Franco y de José Antonio Primo de Rivera, destacado líder del fascismo español y fundador de la Falange, deberían entregarse a las familias.

3. Medidas educativas. Los españoles han sido educados en dos ideas erróneas e interesadamente sesgadas: 1) enfrentamiento fratricida entre dos bandos con responsabilidad simétrica y 2) borrón y cuenta nueva.

4. Los miembros de las fuerzas armadas no reciben formación sobre las graves violaciones de derechos humanos y su responsabilidad en los crímenes del franquismo. Igualmente, los jueces no reciben formación en derechos humanos ni sobre la obligación del Estado de perseguir los crímenes internacionales.

5. Falta de información. No hay cifras oficiales de número de víctimas de la guerra y la dictadura, de presos, de muertes en bombardeos, de niños robados, de participación de empresas en la violación de derechos humanos. Estos datos van siendo conocidos no gracias al estado, sino a pesar de él, cuya política archivística es obstruccionista hacia la investigación de este tipo de datos.

6. Acceso restringido a los documentos. Dificultades de víctimas, periodistas e investigadores para acceder a archivos. La Ley de Transparencia (2013) no aborda estas cuestiones.

7. Privatización de las labores de identificación y exhumación de víctimas. Existen 2382 fosas, según el último censo disponible y entre 114.000 y 150.000 desaparecidos. No existe antecedente alguno en que un estado haya trasladado a las familias de las víctimas las tareas, costos y responsabilidades de dichas acciones.

8. Ley de Amnistía (1977). Utilizada como ley de punto final, y por tanto, incompatible con la legislación internacional, por lo que debe derogarse.

9. Jurisdicción universal. Se recuerda al gobierno la obligación de colaborar con la justicia argentina, incluyendo la extradición solicitada de una veintena de acusados si la justicia española no investiga y juzga a los responsables. El Estado español ha boicoteado todo lo que ha podido las iniciativas de la jueza María Servini de Cubría, encargada del caso.

10. Discriminación de las víctimas del franquismo respecto a las víctimas del terrorismo, convirtiendo a las primeras en víctimas de segunda.

Estas visitas constituyeron la primera ocasión en que las Naciones Unidas escucharon y actuaron seriamente en relación con los crímenes del franquismo. Las recomendaciones, junto al plazo de tres meses que dieron para que el Estado español contestara qué medidas iba a tomar, fueron olímpicamente desoídas. Antes y después de ellas, el Estado español ha recibido quejas de otros mecanismos e instituciones (Comité Contra la Tortura, Comité de Derechos Humanos, Consejo de Europa) por su falta de voluntad tanto para poner en marcha estas medidas como para colaborar con la justicia argentina. La última llamada de atención se produjo en septiembre de 2017 (documento A/HRC/36/39/Add.3), con un duro informe en el que el Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas insiste en sus recomendaciones desatendidas, reitera sus críticas a la desatención de las víctimas y a la obstrucción del estado español a la justicia argentina y *“observa con preocupación la permanencia de un patrón de impunidad basado en una serie de factores y argumentos contrarios a los principios que emergen de las obligaciones internacionales de España”*.

Para las Naciones Unidas la justicia transicional comprende “*toda la variedad de procesos y mecanismos asociados con los intentos de una sociedad por resolver los problemas derivados de un pasado de abusos a gran escala, a fin de que los responsables rindan cuentas de sus actos, servir a la justicia y lograr la reconciliación*” (informe ONU S/2004/616). Existen documentos de Naciones Unidas y otras instancias (p. ej., los Principios de Chicago sobre Justicia Transicional, documento de directrices de varias instituciones) que orientan la práctica de la Justicia Transicional.

Lamentablemente, España no satisface los estándares de la legislación internacional en relación a los crímenes del franquismo, una de las más crueles y longevas dictaduras de Europa occidental, y tampoco aplica las medidas de Justicia Transicional indicadas anteriormente, a pesar de las



recomendaciones de los órganos e informes de Naciones Unidas y del Consejo de Europa, así como las peticiones de organizaciones como Amnistía Internacional, la Comisión Internacional de Juristas, Right International Spain (RIS), la Asociación Española para el Derecho Internacional de los Derechos Humanos (AEDIDH), etc. Sin embargo, sí puede señalarse que en materia de reparación material (no ha ocurrido lo mismo con la reparación simbólica) se han aplicado algunas medidas concediendo pensiones y compensaciones económicas. Así (seguimos a Aguilar, 2008), el Real Decreto-Ley de 6-3-1978 concedía pensiones de jubilación a los militares y a las Fuerzas del Orden republicanas, o a sus herederos, y unos meses más tarde se ampliaba la amnistía a los funcionarios de justicia depurados casi cuatro décadas antes; en 1979, una ley otorgaba pensiones y asistencia médica y social a viudas y familiares de fallecidos durante la guerra; en 1984 se reconocían como contribuciones a la Seguridad Social los años pasados en prisión (se entiende que por motivos políticos y/o sindicales). En 1986, militares condenados por pertenencia a la clandestina *Unión Militar Democrática* recuperaron sus derechos activos. Diez años más tarde se reconoció la



nacionalidad española a los brigadistas internacionales que fueron a España a defender “la libertad y la democracia” expresando en la disposición “la gratitud de la Nación”.

En 1998 se restituyó a los partidos políticos los bienes incautados, lo que diez años antes se había hecho con los sindicatos; sin embargo, la devolución de bienes no se ha hecho a particulares.

El tono de las disposiciones durante estas décadas es bastante pusilánime en el reconocimiento de la República y sus defensores, aunque va cambiando en las disposiciones de la década del 2000, donde comienza a hablarse de víctimas, represión, reconocimiento, etc. Por último, en 2007 se produce un importante salto cualitativo (Aguilar, 2013) con la llamada Ley de Memoria Histórica, con la que se amplían reparaciones, se otorgan subvenciones para asociaciones dedicadas a la recuperación de la memoria y a las exhumaciones de fosas comunes (una privatización de una tarea que le corresponde al estado, no a las víctimas), se ordena la retirada de símbolos franquistas y se procura facilitar el acceso a la documentación; además, se declaran ilegítimas (pero no se anulan) las sentencias de los consejos de guerra. Con la llegada en 2011 del Partido Popular al gobierno, esta ley queda sin presupuesto y el incumplimiento en materia de retirada de simbología franquista es flagrante. En suma, todas estas medidas son manifiestamente insuficientes y no han constituido un mínimo aceptable de reparación para la brutalidad de los sufrimientos infligidos a las víctimas del golpe de estado y de la dictadura franquista.

Es el Estado español, como sujeto internacional, el que debe cumplir con los estándares internacionales, pero ha apostado por la amnesia, por un modelo de olvido absoluto en cuestión de derecho a la verdad, pretendiendo incluso exportar a Latinoamérica en años pasados un modelo de transición hacia la democracia que, como se ha visto con posterioridad, en realidad ha quedado en un modelo español de impunidad. Aguilar (2013) atribuye esta opción, en gran parte, a la colaboración que el sistema judicial prestó a la dictadura franquista, colaboración que no hubo en otros casos, como Argentina o Chile con los que Aguilar compara la experiencia española. Una colaboración que



quedaría en evidencia si se declararan nulas (no solo injustas o ilegítimas) las penas impuestas por los tribunales franquistas, nulidad que sí se produjo en Alemania y Austria con las sentencias del nazismo. *“La represión franquista –dice Aguilar- no habría sido posible sin la implicación del sistema judicial La dictadura, además, al ser la más longeva de las tres [Alemania, Italia, España], dispuso de más tiempo para adoctrinar y perpetuar hábitos de dependencia ideológica, lo que ayuda a explicar el conservadurismo del sistema judicial y su resistencia a revisar el pasado”.*

No obstante, en la última década algunas comunidades autónomas (división territorial en España, hay 17 comunidades) sí están legislando y/o aplicando medidas de Justicia Transicional y algunas formas de reconocimiento a las víctimas del franquismo, incluyendo lugares de memoria. Naturalmente, son aquellas que no están gobernadas por el Partido Popular. A diciembre de 2017 las comunidades autónomas provistas de leyes de memoria histórica son Andalucía, Cataluña, País Vasco, Islas Baleares, Navarra y País Vasco. Estas tienen desigual alcance y objetivos: algunas se refieren a la responsabilidad de los poderes públicos en materia de localización de fosas y exhumación de restos (como la de Islas Baleares), mientras que otras omiten estos aspectos (Cataluña y País Vasco); algunas se limitan a la creación de un organismo (Cataluña y País Vasco) y otras se extienden en aspectos como la necesidad de incidir en el currículum escolar (Andalucía y Navarra) o la obligación de los poderes públicos de denunciar ante la Justicia posibles crímenes contra la humanidad (Andalucía e Islas Baleares), incluso la ley de Navarra resalta en su preámbulo que *“en Navarra no hubo guerra civil. Simplemente por pensar diferente más de 3400 personas fueron asesinadas”*; una de ellas (Andalucía) se refiere a una *“futura Comisión de la Verdad”* <sup>(5)</sup>.

En la actualidad (febrero de 2018) están en proyecto leyes de memoria en Extremadura, la Comunidad Valenciana y la Comunidad de Madrid. Esta última es un caso curioso, pues se trata de una comunidad autónoma gobernada por el Partido Popular; este hecho explica que la ley esté pensada en realidad para las víctimas del terrorismo de las

últimas décadas, intentando con un lavado de cara desmarcarse tímidamente de las inequívocas adherencias franquistas de este partido, con la estratagema de cubrir bajo la expresión *“víctimas de violaciones graves de derechos humanos en contextos de violencia”*, realidades tan distintas como el terrorismo de ETA y el terrorismo de estado practicado durante décadas por los aparatos del franquismo. La ley prácticamente no podría tener aplicación para las víctimas del franquismo en materia de reparación, si bien señala la responsabilidad de los poderes públicos en la localización, recuperación e identificación de las personas desaparecidas, así como la elaboración de un censo de personas desaparecidas, censo que se ha boicoteado en otras comunidades donde gobierna el Partido Popular.

Para terminar este apartado, cabe señalar que otras dos comunidades autónomas han anunciado la intención de elaborar futuras leyes de memoria: Aragón y Cantabria. En otras comunidades (Galicia, Asturias, Canarias) existen grupos políticos presionando para legislar en esta materia. Por otro lado, parece evidente la necesidad de una nueva ley estatal que mejore la tímida ley 52/2007, pero esto será imposible mientras el gobierno central siga a manos del Partido Popular.

En suma, el estado optó en la Transición Española por el olvido del pasado -entendiendo que así se facilitaba la reconciliación- seguido de medidas de reparación parcial, con ausencia de procesos penales y de cualquier clase de medidas de depuración (Tamarit, 2014). Cuatro décadas después, una parte de la sociedad civil cuestiona las políticas de olvido, la impunidad asegurada para los mayores criminales y torturadores (varios de los cuales viven todavía, así como gran parte de los responsables de la gigantesca trama de robo de bebés, que se inicia en pleno franquismo y continúa durante dos décadas más en plena democracia) y la visión autocomplaciente de los actores políticos de entonces. El movimiento memorialista, por su parte, persiste en sus reivindicaciones, recogidas en la llamada Carta de Vicálvaro (Madrid), firmada por unas ochenta organizaciones; esta Carta consta de 17 puntos agrupados en torno a los derechos reconocidos en el Informe Joinet (verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición).

Compartiendo la máxima de que sin memoria no hay democracia, y reconociendo la labor de algunas comunidades autónomas y corporaciones locales, el Estado español, como tal, suspende clamorosamente en materia de Justicia Transicional, ofreciendo un espectáculo bochornoso su abandono de las víctimas de los crímenes del franquismo. En algún comunicado, la *Asociación Para la Recuperación de la Memoria Histórica* (ARMH) denuncia que el Estado español trata a estas víctimas como si fueran un estorbo para la democracia, pero no podemos consentir que la democracia se construya sobre el olvido. Sin embargo, no es descartable que un futuro gobierno acometa nuevas medidas si la presión tanto interna (movimiento memorialista) como externa (órganos internacionales) sigue aumentando.



## **NOTAS:**

1- Este trabajo modifica y actualiza dos anteriores publicados por el autor en la revista ***Derechos y realidad***, 2012 y 2015, ver referencias. Será publicado como capítulo de un libro en Brasil en 2018.

2- Fuentes de información para este apartado: Informe de la Unión Progresista de Fiscales (<http://www.upfiscales.com/info/comunicados/uh52.htm>), informes de Amnistía Internacional, autos de 16-10-2008 y de 18-11-2008 del juez Garzón, querella impuesta en Argentina el 14-4-2010, votos particulares de los magistrados de Prada, Bayarri y Sáez, Dictamen de la de la Asociación Española para el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, informe del Equipo Nizkor “La cuestión de la Impunidad en España y los crímenes franquistas”, Informe pericial realizado a petición de la Coordinadora Estatal de Apoyo a la Querella Argentina (Ceaqua, citado como Babiano y otros, 2017) y artículos citados en las referencias bibliográficas al final del trabajo.

3- El Equipo Nizkor, dirigido por Gregorio Dionis, fue pionero (2004) en un informe exhaustivo de los crímenes cometidos por el franquismo con una perspectiva jurídica. Dicho informe fue presentado por 16 organizaciones memorialistas y apoyado por otras 18 organizaciones, más algunas adhesiones a título individual. Ver referencias bibliográficas.

4- Ver: <http://minotauro.periodismohumano.com/2010/04/11/carlos-slepoy-en-espana-hubo-un-genocidio/>

5- Notas tomadas de un informe a cargo del abogado, Juan Carlos García Bravo, para la Plataforma por la “Comisión de la Verdad”.



## **REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS:**

Aguilar Fernández, Paloma (2013). ***Jueces, represión y justicia transicional en España, Chile y Argentina***. Revista Internacional de Sociología, vol. 71(29), pp. 281-308. Disponible en:

<http://revintsociologia.revistas.csic.es/index.php/revintsociologia/article/viewArticle/516>

Aguilar Fernández, Paloma (2008). ***Políticas de la memoria y memorias de la política: el caso español en perspectiva comparada***. Madrid: Alianza

Aróstegui, Julio (2012, coord.). ***Franco: la represión como sistema***. Barcelona: Flor del Viento ediciones.

Babiano Mora, José; Gómez Bravo, Gutmaro; Míguez Macho, Antonio; Tébar Hurtado, Javier (2017). ***El franquismo y la violación sistémica de los derechos humanos***. Informe pericial encargado por la Coordinadora Estatal de Apoyo a la Querella Argentina (Ceaqua), no publicado.

Bahamonde, Antonio (2017). ***Un año con Queipo de Llano (memorias de un nacionalista)***. Sevilla: Espuela de Plata, 217 (3ª ed.).

EQUIPO NIZKOR. ***La cuestión de la impunidad en España y los crímenes franquistas. 2004***. Disponible en: [www.derechos.org/nizkor/espana/doc/impuesp.html](http://www.derechos.org/nizkor/espana/doc/impuesp.html)

Espinosa Maestre, Francisco (2015). ***Lucha de historias, lucha de memorias. España 2002-2015***. Sevilla: Aconcagua Libros.

Espinosa Maestre, Francisco y Ledesma, José Luis (2012). ***La violencia y sus mitos***. En: Viñas, Ángel (ed.), ***En el combate por la historia. La República, la guerra civil, el franquismo***, pp. 475-497.

Feierstein, Daniel (2007). ***El genocidio como práctica social. Entre el nazismo y la experiencia argentina***. Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica.

Gómez Bravo, Gutmaro y Marco, Jorge (2011). ***La obra del miedo***. Barcelona, Península, 2011.

Hernández Sánchez, Fernando (2016). ***El bulldozer negro del general Franco. Historia de España en el siglo XX para la generación del siglo XXI***. Barcelona: Pasado & Presente.

Izard, Miquel (2015). ***Genocidas, cruzados y castradores: terror y humillación en nuestro pasado***. Madrid: Los Libros de la Catarata.

López López, Pedro (2012). ***Los crímenes del franquismo y el derecho internacional. Derecho y Realidad***, nº 20, pp. 279-318. Disponible en: [http://revistas.uptc.edu.co/revistas/index.php/derecho\\_realidad/article/view/4866](http://revistas.uptc.edu.co/revistas/index.php/derecho_realidad/article/view/4866)

López López, Pedro (2015). ***Crímenes del franquismo, derecho y justicia transicional. Derecho y Realidad***, nº 25, pp. 131-144. Disponible en: [http://revistas.uptc.edu.co/revistas/index.php/derecho\\_realidad/article/view/4422](http://revistas.uptc.edu.co/revistas/index.php/derecho_realidad/article/view/4422)

Moreno Gómez, Francisco (2016). ***Los desaparecidos de Franco. Un estudio factual y teórico en el contexto de los crímenes internacionales y las comisiones de la verdad***. Madrid: ed. Alpuerto.

Preston, Paul (2011). ***El holocausto español. Odio y exterminio en la guerra civil y después***. Barcelona, ed. Debate. Slepoy, Carlos (2009). Genocidio y grupos nacionales. Página 12, 16-6-2012. Disponible en: <https://www.pagina12.com.ar/diario/universidad/10-126725-2009-06-16.html>

Tamarit Sumalla, Josep (2014). ***Memoria histórica y justicia transicional en España: el tiempo como actor de la justicia penal***. Anuario Iberoamericano de Derecho Internacional Penal, vol. 2, pp. 43-65. Disponible en: <https://revistas.urosario.edu.co/index.php/anidip/article/view/3434>

Vega Sombría, Santiago (2012). ***Represión universal: un aparato estructurado y jerarquizado***. En: Aróstegui, Julio (coord). ***Franco: la represión como sistema***. Barcelona: La Flor del Viento ediciones, pp. 163-189.

Viñas, Ángel (2013). ***La connivencia fascista con la sublevación y otros éxitos de la trama civil***. En: Viñas et. al. ***Los mitos del 18 de julio***. Barcelona: Crítica, 2013.

## La jueza María Servini

La jueza María Servini instruye en Argentina una querella sobre crímenes del franquismo. La magistrada recorrió España para interrogar a víctimas y querellantes que por edad o condiciones no pueden viajar a Argentina. Según la Coordinadora Estatal de Apoyo a la Querella argentina, las declaraciones se enmarcan en el procedimiento que sigue la jueza en el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal número 1 de Buenos Aires. La iniciativa no ha partido desde Argentina, sino desde España. La magistrada investiga desde hace cuatro años, a raíz de una querella presentada en su país, crímenes cometidos durante la dictadura franquista. Desde Argentina pidió a las autoridades la extradición por torturas del ex inspector de policía Juan Antonio González Pacheco, (Billy el Niño) y del ex guardia civil Jesús Muñecas García, así como de 19 altos cargos de la dictadura franquista, pero la Audiencia Nacional rechazó su entrega al considerar que los delitos están prescritos y la Ley de Amnistía de 1977 les exoneraba de cualquier delito cometido en la dictadura. La querella en Argentina se presentó en 2010 por “delitos de genocidio y/o lesa humanidad” cometidos durante la guerra civil.



La causa fue abierta bajo el principio de justicia universal y reúne numerosas querellas y denuncias presentadas tanto en Argentina como en numerosos consulados del país hispanoamericano en España. Ya en marzo de 2015, el Gobierno de Mariano Rajoy dijo que no detendría a los ex ministros franquistas porque las órdenes de Interpol no son vinculantes. Finalmente, en septiembre de 2016, el gobierno acata el Tratado de Asistencia Judicial suscrito entre Argentina y España, y el Ministerio de Justicia rebota el exhorto a diferentes juzgados territoriales. Pero llega el último jarro de agua fría en octubre 2016, cuando la Fiscalía torpedea las declaraciones de cargos franquistas y víctimas ordenadas por la justicia argentina. La Fiscalía española aduce indeterminación del proceso y dice que es “incompatible” con el concepto de proceso penal. Los querellantes ven este paso como la coartada perfecta para evitar que declaren los franquistas citados por la jueza Servini para determinar si los crímenes cometidos pueden considerarse de lesa humanidad. La querella argentina es la única denuncia abierta en el mundo contra los crímenes del franquismo por los delitos de genocidio y/o crímenes de lesa humanidad cometidos en España durante la dictadura franquista, entre el 17 de julio y el 15 de junio de 1977. España, con más de **150.000** desapariciones forzadas, se sitúa como la segunda mayor fosa del mundo, solo por detrás de la camboyana de Pol Pot.





***Son muchos los temas que preocupan en un momento como el actual y en un mundo como el que tenemos. La información está frecuentemente condicionada a los intereses de los grandes grupos de comunicación industrial, herramientas del poder para influir en las masas. Cuando las noticias se secuestran y dosifican, el pensamiento mayoritario se secuestra y dosifica. Frente a esa práctica cada vez más extendida, el CAUM, en su permanente esfuerzo por animar el pensamiento crítico y analítico, ofrece este espacio para la información, el razonamiento y el pensamiento libres.***